

## CONTESTACIÓN DEMANDA A 202200028 MARTHA OBANDO

Ancizar Jimenez Z <ancizarjuridico2010@gmail.com>

Mar 31/05/2022 4:36 PM

Para: Juzgado 08 Administrativo - Cauca - Popayan <j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores

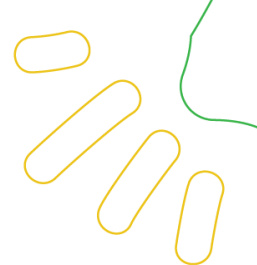
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN

Cordial saludo

Remito el documento de contestación demanda

Agradezco su atención

ANCIZAR JIMENEZ Z



Doctora  
ZULDERY RIVERA ANGULO  
Juez Octavo Administrativo de Oralidad de Popayán  
La Ciudad

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA

RADICACIÓN: 19001333300820220002800  
DEMANDANTE: MARTHA LUCIA OBANDO ZUÑIGA  
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN y otros.  
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

**ANCIZAR JIMENEZ ZEMANATE**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Popayán, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.695.912 expedida en La Vega Cauca, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 204906 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial del Departamento del Cauca, de conformidad con el poder conferido por su representante legal, por medio del presente escrito me permito **CONTESTAR** la demanda entablada por la señora MARTHA LUCIA OBANDO ZUÑIGA identificada con la cédula No. 25.273.395 de Popayán, en contra del **DEPARTAMENTO DEL CAUCA y Otros**, previas las siguientes consideraciones:

#### **I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES.**

La **PARTE DEMANDANTE**, está conformada por la señora MARTHA LUCIA OBANDO ZUÑIGA identificada con la cédula No. 34.558.614 de Popayán representado por su apoderado.

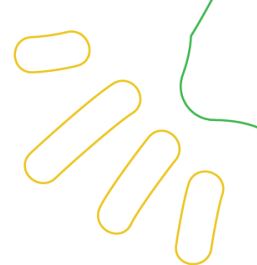
La **PARTE DEMANDADA**, la conforma el **DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA**, representado legalmente por el Dr. **ELIAS LARRAHONDO CARABALI**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.365.206 expedida en Buenos Aires Cauca.

#### **FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS**

Por no estar legitimada en la causa por pasiva la entidad que represento judicialmente y por no ser la llamada a responder por las pretensiones de la demanda propuesta, me opongo a todas y cada una de las **PRETENSIONES Y CONDENAS** formuladas en la presente demanda, teniendo en cuenta que las mismas carecen de fundamentos jurídicos que proceda a endilgar responsabilidad a esta Secretaría, y también por las razones y excepciones que más adelante manifestaré.

#### **FRENTE A LOS HECHOS**

Teniendo en cuenta que no estamos legitimados en la causa por pasiva, me atengo a lo que resulte probado en los mismos.



A LAS PRETENSIONES, DECLARACIONES Y CONDENAS Me opongo a todas y cada una de ellas, por las razones y excepciones que en adelante manifestaré.

#### SITUACIÓN FACTICA.

El día 15 de septiembre de 2019, la aeronave de Transporte Aéreo, tipo PIPER PA31-350, con Matrícula HK5229, explotada por la empresa Transpacífico S.A.S., fue programada para efectuar un vuelo con ruta Popayán – López de Micay, la cual colisionó contra una vivienda minutos después de su despegue, lo que ocasionó serias lesiones físicas y psicológicas. El día de la ocurrencia de los hechos, el señor NORMAN PAOLO RIASCOS RODRIGUEZ (q.e.p.d) se dirigía hacia el Municipio de López de Micay, a cumplir con el ejercicio de su actividad laboral como rector de la Institución Educativa San Antonio de Chaure, cargo que desempeñaba en propiedad, según soportes anexos en la conciliación.

Según el informe de inspección de campo registrado en el informe preliminar, emitido por la aeronáutica civil refiere que: "... El área del accidente correspondía a un terreno urbano habitado. Los restos de la aeronave se encontraron concentrados en un área de 50 metros cuadrados alrededor y encima de una vivienda.

*"Teniendo en cuenta los hallazgos generales de la inspección de campo, el estado y la ubicación de los restos de la aeronave y las declaraciones de los testigos, se pudo establecer que, aparentemente, la aeronave empezó a perder altura continuamente, en un viraje hacia la derecha que se inició segundos después del despegue; la velocidad fue relativamente baja; el avión impacto inicialmente contra unos árboles y luego contra una vivienda, girando sobres sus ejes vertical y longitudinal, y terminó con un rumbo de 310 grados".*

#### **Marco legal de la Responsabilidad Extracontractual del Estado.**

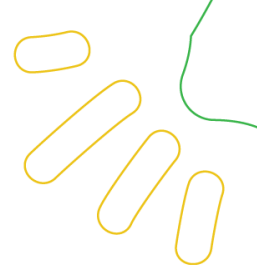
El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, consagra la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, la cual establece que, para su configuración, debe existir un daño antijurídico causado a un administrado y que el mismo le sea imputable al Estado, tanto por su acción como por su omisión; es decir, la responsabilidad extracontractual del Estado se acredita con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

Al respecto, el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ha reiterado en innumerables ocasiones, que la Responsabilidad del Estado no se limita únicamente a la ocurrencia del daño, sino que ha advertido que el mismo debe ser antijurídico, esto es, que la parte que lo sufre, no tenga la obligación de soportarlo; no obstante, el otro atributo generador de la responsabilidad, en la cual radica la posibilidad que el Estado pueda reparar integralmente, es que el daño antijurídico sea atribuible a éste, y en ese sentido, dicha corporación ha expresado lo siguiente:

*"En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas)"<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp.10922 C.P. Ricardo Hoyos Duque.  
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca  
Carrera 6 No. 3 – 82, Edificio de la Gobernación del Cauca Teléfono: (057+2) 8244201 Ext. 104  
e-mail: juridica.educacion@cauca.gov.co www.sedcauca.gov.co



según los hechos narrados y las pruebas que fueron arrimadas por la parte demandante, el departamento del Cauca no tiene incidencia causal alguna en la consumación del hecho por el cual se demanda.

Dentro del presente acápite se demostrará las circunstancias por las cuales se deberá declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Cauca respecto del caso que ahora es objeto de debate.

Debe mencionarse que el principio de legalidad, respecto de las autoridades públicas, se constituye como el fundamento para el ejercicio de sus competencias, lo anterior en virtud de lo establecido por el artículo 121 de la Constitución Política, según el cual ninguna autoridad pública tiene la posibilidad para ejercer función alguna distinta a las que han sido atribuidas expresamente por la Constitución o la ley, aspecto que permite concluir que la competencia se incorpora como un presupuesto de validez de los actos o actuaciones que son proferidos por los órganos estatales.

Lo anterior ha permitido a la doctrina erigir el concepto de contenido obligacional, según el cual existen, como consecuencia del principio de legalidad antes mencionado, unas prohibiciones y límites a la autonomía de la voluntad estatal que influye claramente en la limitación del decálogo de posibilidades para adoptar decisiones. En lo que hace a ese respecto, se concluye que, según el concepto de contenido obligacional, un determinado órgano estatal solamente podrá actuar de acuerdo con el marco de competencias que le han sido otorgadas vía Constitución o vía legal, y -además- la actuación que desarrolle en cumplimiento de ese marco debe acatar las reglas procedimentales dictadas previamente para su perfeccionamiento.

Ahora bien, en cuanto hace con el tema de la falta de legitimación en la causa por pasiva, el Consejo de Estado ha señalado que esta puede configurarse de hecho o materialmente. En reiterada jurisprudencia indicó:

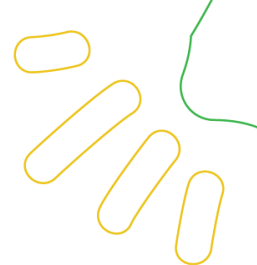
*“(...) La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.*

*“Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas<sup>2</sup>(...).*

*“(...) Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de*

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Radicación: 110010326000199713503 00.



*contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.*

*“En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”*

Dentro del caso que es objeto de análisis resulta claro que el Departamento del Cauca no se encuentra legitimado en la causa por pasiva desde el punto de vista material, toda vez que las normas que componen el contenido obligatorio que lo compele en comparación con los hechos puestos de presente por la parte demandante, permiten evidenciar que no defraudó en forma alguna ese contenido normativo.

En efecto, tal como lo señala la parte convocante, lo que se reprocha dentro del caso concreto tiene que ver con la supuesta falta de vigilancia y control sobre el acceso de los pasajeros a la avioneta dentro del aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán, actuación que no le corresponde en forma alguna al ente territorial y, por tanto, se evidencia con toda claridad la ausencia de legitimación en la causa por pasiva respecto del mismo.

En lo que hace a ese respecto, se concluye que el Departamento del Cauca no participó realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda, amén de que no existe, y así ha quedado comprobado, relación alguna entre los hechos que causaron el daño que ahora se reclama y la conducta asumida por el Departamento.

En ese orden de ideas, como quiera que no se ha puesto de presente por parte de los demandantes cuál es la conducta que puede llegar a atribuir responsabilidad a la entidad que represento, pero si se han mencionado otra serie de hechos que -en efecto- tendrían la posibilidad para comprometer la responsabilidad de otros órganos, deberá declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Cauca.

## EXCEPCIONES

### 1. FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA.

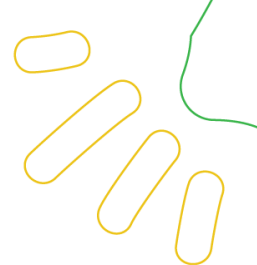
Dentro del presente acápite se demostrará las circunstancias por las cuales se deberá declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Cauca respecto del caso que ahora es objeto de debate.

Debe precisarse que la legitimación en la causa puede ser de hecho o material; el Consejo de Estado ha precisado sobre el tema lo siguiente:

EXPEDIENTE: 50001-23-33- 000-2019-00456-00

“(…)

Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca  
Carrera 6 No. 3 – 82, Edificio de la Gobernación del Cauca Teléfono: (057+2) 8244201 Ext. 104  
e-mail: [juridica.educacion@cauca.gov.co](mailto:juridica.educacion@cauca.gov.co) [www.sedcauca.gov.co](http://www.sedcauca.gov.co)



Frente a la legitimación en la causa, el Consejo de Estado ha indicado que consiste en:

“(...) la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada (...)”<sup>3</sup>.

Continúa la Corporación indicando que:

“(...) Ahora bien, también ha sostenido la Sala que la legitimación en la causa puede ser de hecho cuando la relación se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir, de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, o material frente a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan demandado o hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta clase de legitimación, no constituye una excepción de fondo porque no

enerva la pretensión procesal en su contenido, sino que es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito, sin que el estar legitimado en la causa otorgue el derecho a ganar, lo que sucede aquí es que si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto, no porque él haya probado un hecho que enerve el contenido material de las pretensiones, sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo – no el procesal –; si la falta de legitimación en la causa es del demandado al demandante se le negarán las pretensiones, no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho, sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder, y, por eso, el demandado debe ser absuelto.

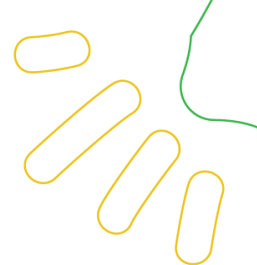
## **2. INEPTA DEMANDA POR FALTA DE CONEXIDAD ENTRE HECHOS, PRETENSIONES Y PRUEBAS:**

De ser utilizado el mismo escrito de convocatoria para la demanda, resulta posible concluir que no se cumplió con uno de los requisitos esenciales de los exigidos por el artículo 162 numeral 3 del CPACA, a saber, se omite precisar cuáles son los hechos determinados que soportan cada una de sus pretensiones frente al demandado DEPARTAMENTO DEL CAUCA, lo que rompe la conexidad entre petitum-hecho y que impide fallar de fondo el presente asunto.

El Maestro HERNANDO DEVIS ECHANDIA dedica un capítulo entero al tema de las pretensiones en su obra Compendio de Derecho Procesal - Teoría General del Proceso, del cual retomo algunos aspectos importantes para los fines de sustentar esta excepción. Dice el Maestro:

*"La pretensión tiene dos elementos esenciales: su objeto y su razón; es decir, lo que se persigue con ella, y la afirmación de que lo reclamado se deduce de ciertos hechos que coinciden con los presupuestos fácticos de la norma jurídica cuya actuación se pide para obtener esos efectos jurídicos.*

*"De ahí que en la demanda se exige indicar lo que se pide y los fundamentos de hecho y de derecho de la petición (...).*



*“Es decir: el objeto de la pretensión lo constituye el determinado efecto jurídico perseguido, el derecho o relación jurídica que se pretende (...), y por lo tanto la tutela jurídica que se reclama; la razón de la pretensión es el fundamento que se le da, y se distingue en razón de hecho y derecho, ósea el conjunto de hechos que constituyen el relato histórico de las circunstancias de donde cree deducir lo que pretende y la afirmación de su conformidad con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material o sustancial.*

*“La razón de las pretensiones se identifica con la causa petendi de la demanda, y con los hechos en que se basa la imputación formulada al sindicado.*

*“El juez debe resolver sobre ambos elementos, sea para acceder a lo pretendido o para rechazarlos. Si encuentra que existe la conformidad que se reclama entre los hechos, el derecho material y el objeto pretendido, reconoce o declara las consecuencias jurídicas que en las peticiones o imputaciones se precisan; o la niega, en la hipótesis contraria (...).*

*“De lo anterior se deduce que el problema de la identidad de las pretensiones procesales, para efectos de la litis petendia y la cosa juzgada, lo mismo que para que la determinación de la congruencia de la sentencia, se vincula a las peticiones u objeto de la pretensión y a los fundamentos o la razón de hecho o causa petendi y no a las normas jurídicas materiales invocadas en la demanda.”*

Congruencia de los hechos de la demanda con las pretensiones y de estos con la sentencia:

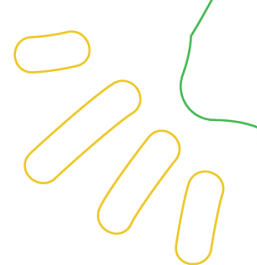
De conformidad con el artículo 281 del C.G.P. la sentencia debe estar en concordancia con los hechos y las pretensiones de la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas cuando la ley lo exige.

Pero la sentencia debe concordar de manera especial con las pretensiones de la demanda, porque el juez no puede otorgar más de lo pedido ni algo distinto, o condenar por causa diferente a la invocada en ella, cosa que no ocurre con las excepciones donde el juez puede incluso declararlas de oficio, siempre y cuando estén probadas en el proceso y no sean de aquellas que requieran alegación de parte. Dichas pretensiones para poder ser efectivamente declaradas como probadas deben tener una relación de conexidad con los hechos invocados en la demanda y en nuestro caso en ninguno de tales hechos se relaciona cuales son imputables al DEPARTAMENTO DEL CAUCA, razón por la cual las pretensiones no tienen una relación fáctica que las sustente.

Sobre este requisito fundamental la doctrina nacional en manos del Doctor HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO ha explicado que:

*“En la demanda, además de la determinación de las pretensiones, deben indicarse los hechos, es decir, hacer la relación de los acontecimientos en los cuales el demandante fundamenta sus pretensiones. Esos hechos deberán presentarse determinados, esto es, redactados en forma concreta y clara; clasificados, o sea ordenados, pues clasificar es precisamente, agrupar en forma ordenada, de modo que los hechos relativos a un mismo aspecto se formulen de manera conjunta y no desordenadamente; por último deben ir numerados,...*





*“Es de particular importancia determinar y clasificar adecuadamente los hechos, por cuanto son precisamente ellos, y no las pretensiones, los que deben acreditarse mediante los diversos medios probatorios establecidos por el Código.*

*“De ahí que no es posible concebir una demanda sin que tenga una relación completa de los hechos, pues éstos son el apoyo de las pretensiones.*

*“Nos parece importante señalar que en el aparte de los hechos no cabe, dentro de una estricta técnica procesal, realizar apreciaciones subjetivas acerca de posibles formas de ocurrencia de lo que se quiere probar, como tampoco interpretaciones legales de ciertas disposiciones, errores estos que se observan en numerosas demandas...*

*“(…), son múltiples las demandas que abundan en hechos inconducentes que tan solo vienen a restar claridad al escrito y debilitar la posición del demandante, requiriéndose por ende un nítido criterio en orden a sintetizar dentro del aparte de los hechos tan solo aquellos que importan, que son de relieve para efectos de la determinación solicitada”.*

Falta entonces un nexo claro que una los hechos presunta y oscuramente imputados a mi mandante con las pretensiones de la demanda.

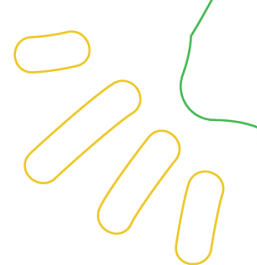
En efecto, la demanda interpuesta es austera en materia de prueba, para determinar la participación activa u omisiva, pero efectiva, del DEPARTAMENTO DEL CAUCA para causar el daño alegado. No se encuentra dentro de la redacción de la demanda más que conjeturas sin ningún sustento probatorio que enlacen los hechos con las pretensiones y más aún con el fundamento de imputación o del deber de reparar consistente en la falla del servicio, pues lo cierto es que, no se evidencia claramente la forma en como la presunta participación del DEPARTAMENTO DEL CAUCA fue efectiva en la causación del daño a los actores, máxime cuando en el escrito de convocatoria se señala expresamente que lo que se reprocha expresamente es la falta de vigilancia y control dentro del aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán.

Así las cosas, sin haber probado ninguno de los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, y como quiera que ni siquiera existe un hilo conductor de los hechos, y las pretensiones, se configura la causal de excepción previa consagrada en el numeral 5º del artículo 100 del Código General del Proceso, por lo cual se solicita al señor Juez declarar probada esta excepción previa y como consecuencia de ello, dar por terminado el proceso y/o decretar la inadmisión de la demanda y condenar en costas a la parte demandante.

### **3. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

El artículo 90 de la Constitución Política señala que *“el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”*. En ese orden de ideas, para que una entidad estatal sea declarada responsable por la producción de un daño antijurídico, debe acaecer lo que la dogmática jurídica conoce con el nombre de elementos de la responsabilidad.





En lo que hace a ese respecto, se ha señalado que tales elementos son: una actuación u omisión de la autoridad administrativa; un daño antijurídico; el nexo de causalidad entre la actuación u omisión de la autoridad administrativa y el daño causado.

Dentro del caso sub examine se extraña la configuración del primero de tales elementos, toda vez que, tal como se ha señalado, del escrito de demanda no se deriva ninguna actuación u omisión del ente territorial que represento, por lo que, para efectos de intuir cuál es el alcance de lo pretendido por la parte demandante, se ha debido realizar un esfuerzo interpretativo que tiene injerencia en la transgresión del derecho de defensa, toda vez que no se sabe exactamente los motivos por los cuales se demanda y, en ese sentido, no se tiene la virtualidad para ejercer en forma adecuada el derecho fundamental antes indicado.

En tal sentido, para efectos de establecer cual es la acción u omisión de la entidad que tuvo la capacidad para causar el daño (de haberse señalado alguna por parte del demandante), debe tenerse en cuenta cuál es el contenido obligacional que constriñe el actuar del ente territorial, toda vez que es, precisamente, a través de éste que resulta posible determinar si se incurrió en omisión o culpa por acción.

Así las cosas, respecto de las obligaciones que posee el Departamento del Cauca, *“lo que principalmente guarda relevancia jurídica es la forma como estas se concretan, toda vez que son las acciones u omisiones materiales, los fenómenos a través de los cuales se puede constatar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones administrativas, así como los que dan lugar a una eventual responsabilidad del sujeto que cumple una función administrativa”*<sup>3</sup>. Para conseguir dicho objetivo, entonces, resulta necesario acudir a lo estipulado en el ordenamiento jurídico vigente, dado que, para ese efecto, el límite impuesto a las actuaciones de los órganos estatales lo impone el principio de legalidad, el cual, para las actuaciones administrativas, *“se traduce en la necesidad de un soporte normativo para el desarrollo de actividades específicas relacionadas con la función administrativa. De esta manera, la concreción de las actividades administrativas, es el fenómeno que debe observarse, para la constatación del efectivo cumplimiento o no, de obligaciones propias de los sujetos que dan desarrollo a la función administrativa”*<sup>4</sup>.

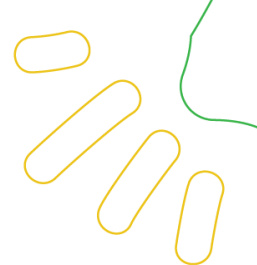
En el caso que es objeto de estudio, tal como se viene argumentando, el demandante no realizó un esfuerzo argumentativo siquiera sumario para derivar la responsabilidad de la entidad que represento, por lo que sus señalamientos no tienen la virtualidad par comprometer la misma y, por el contrario, ponen en evidencia que no existe acción u omisión que puedan conllevar a la declaratoria de responsabilidad.

De otra parte (como consecuencia -además- de no cumplirse con el elemento trascendental de la configuración de una acción u omisión por parte de la entidad que represento), no resulta posible realizar la imputación de la responsabilidad a mi defendida. El término imputación hace referencia a la atribución de una consecuencia, para el caso el deber de reparar, para un sujeto determinado. En efecto, *“cuando se imputa algo a un sujeto, en este caso al Estado, lo que estamos haciendo es atribuir a éste el deber de reparar un perjuicio sobre la base de estimar que existe un daño, que ese menoscabo es actual y cierto, que existe una relación de causalidad entre el obrar del Estado”*.

---

<sup>3</sup> ALBERTO MONTAÑA PLATA. Fundamentos de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2010. Págs. 167 y 168.

<sup>4</sup> Ibídem.



o no del elemento de la imputación, deben estudiarse la esfera fáctica y jurídica que implica este fenómeno jurídico.

Es por todo lo anterior que, para efectos de poder realizar un juicio de imputación, debe abarcarse la esfera fáctica y la jurídica, las cuales poseen criterios que resultan diferenciales. En efecto, la imputación significa *“una reelaboración gnoseológica jurídica sobre la causalidad, pero no es la causalidad misma, va más allá porque es entendida como imputatio factis, que no solo obedece al criterio de la vinculación –no necesariamente física, pues también puede obedecer a criterios normativos y jurídicos-, sino que también aparece la aplicación de la justicia material deducible para el caso, bien mediante factores subjetivos u objetivos, lo que cubre la totalidad de los regímenes y criterios de responsabilidad, y que correspondería a la imputatio iuris, con lo que la imputación plena se perfeccionaría”*.

Para Adriano de Cupis el nexo de causalidad hace referencia al *“nexo etimológico material (es decir, objetivo o externo) que liga un fenómeno a otro, que en cuanto concierne al daño, constituye el factor de su imputación material al sujeto humano”*<sup>5</sup>. En voces de Arturo Alessandri, hay relación de causalidad *“cuando el hecho –o la omisión- doloso o culpable es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin él éste no se habría producido”*<sup>6</sup>. Para Isodoro Goldenberg el nexo causal hace referencia al *“enlace material entre un hecho antecedente y un resultado (daño), conocido en doctrina como “imputabilidad o atribuibilidad objetiva”, “imputatio facti” o “vínculo material”; en tanto que la reelaboración a nivel jurídico de dicha conexión, con las particularidades que le atribuyen las teorías de la relación de causalidad, nos conduce al concepto de “relación causal”*<sup>7</sup>. Para Eduardo Zannoni, finalmente, *“la causa de un hecho dañoso es la condición que se reputa adecuada, entre todas las que pueden haber concurrido, para producir objetivamente el daño como resultado”*

En ese orden de ideas, resulta posible concluir que el estudio que debe realizar un juez sobre la posible configuración de la responsabilidad, en cuanto hace con la imputabilidad, debe comenzar a partir del análisis de los hechos que tienen relevancia respecto de la causación de los daños, verificación que reviste de dificultad<sup>8</sup> dado que, en la práctica, en la causación de los daños, participan, generalmente, una multiplicidad de hechos, algunos más determinantes que otros, por lo que, *“la acreditación del nexo causal en términos absolutos es algo bastante alejado de la realidad”*.

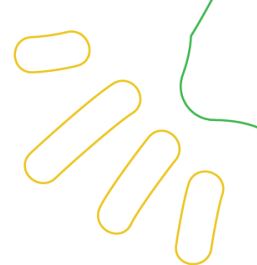
Así las cosas, el propósito de la indagación sobre la configuración del nexo causal consisten en determinar cuál ha sido *“la historia encabezada por el resultado dañino, es decir, la cadena de eventos que desemboca en el resultado dañino final, para determinar si el incumplimiento (o hecho atribuido al agente) es o no un evento de esta cadena; esta investigación no es jurídica, y pretende solamente proporcionar evidencias de hecho”*

<sup>5</sup> ADRIANO DE CUPIS. El Daño. Casa Editorial Bosch. Barcelona, España. 1975. Pág. 245.

<sup>6</sup> ARTURO ALESSANDRI RODRÍGUEZ. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno. Editorial jurídica de Chile. Santiago, reimpresión 2014. Pág. 176.

<sup>7</sup> ISODORO H GOLDENBERG. La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil. Segunda Edición Ampliada y con Actualización Jurisprudencial. Editorial La Ley – 2000. Buenos Aires, Argentina. Pág. 1.

<sup>8</sup> Respecto de la dificultad que reviste la identificación de la causa que da origen a un determinado daño, ha señalado María del Pilar Amenábar que, precisamente, dichas dificultades se *“vinculan con el concepto mismo de causa. Es que cualquier hecho dañoso se presenta normalmente no como el efecto de una sola causa, sino, más bien, como el resultado de un complejo de hechos y condiciones agrupados en una o varias series. Éstas, a su vez, pueden ser autónomas entre sí o dependientes unas de otras, dotadas en su individualidad –en mayor o menor medida- de un cierto poder casual. A tales dificultades se suman las derivadas de la coautoría, la concurrencia de culpa de la víctima u otra causa ajena, que plantean problemas cuando se trata de distinguir el poder causal de cada hecho”*. MARÍA DEL PILAR AMENÁBAR. Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública. Rubinzal – Culzoni Editores. Buenos Aires, 2008. Pág. 323.



Dentro del caso que es objeto de análisis el estudio sobre los hechos, en virtud de lo señalado por la parte convocante, impide, respecto de la entidad que represento, que se siga adelantando el juicio de responsabilidad, como quiera que no se ha establecido ningún vínculo entre lo que aconteció, es decir, el accidente, y la posible responsabilidad por acción u omisión atribuible al Departamento.

Desde el punto de vista de la teoría de la causalidad adecuada, se tiene que, para efectos de la atribución de la responsabilidad, deben prevalecer criterios de idoneidad<sup>9</sup> de un determinado hecho para producir una consecuencia determinada, con lo cual, resulta concluyente el estudio de *“la posibilidad y probabilidad de un resultado, según lo que acaece de ordinario en función de los acontecimientos”*.

En ese orden de ideas, se tiene como causa aquella condición que, según el curso natural y ordinario de los acontecimientos, es idónea para producir un determinado resultado y, es por ello que, la probabilidad y la previsibilidad<sup>10</sup> se configuran como aspectos fundamentales dentro de la teoría, como quiera que otorgan elementos de juicio, desde la óptica de la experiencia, que permiten entrever cuál de todas las causas es la adecuada.

Así pues, efectos de poder atribuirle la responsabilidad al Departamento del Cauca desde el punto de vista de la teoría de la causalidad adecuada, debe tenerse en cuenta, en términos de probabilidad y previsibilidad, cuál era la conducta esperada, lo anterior en observancia del principio de legalidad, según el cual las entidades públicas solamente podrán realizar las funciones que le son asignadas por ley.

En lo que hace a ese respecto, se reitera, la parte demandante no ha señalado cuál es la conducta que resulta reprochable ejercida por el Departamento del Cauca, motivo por el cual el análisis sobre la incidencia causal de los hechos por los cuales se demanda, la cual, como se dijo, reviste de dificultad, para el caso concreto ha implicado un ejercicio calificado como imposible para la parte demandada, toda vez que al no saberse por qué se demanda, no se ha podido edificar en forma adecuada el derecho de defensa.

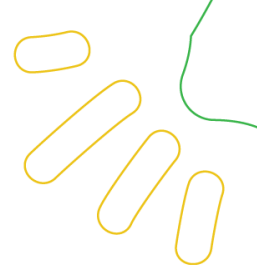
En efecto, desde el punto de vista de la causalidad adecuada, encuadrada desde la teoría de imputación subjetiva basada en la falla en el servicio, el hecho en virtud del cual el accidente se produjo como consecuencia del sobrepeso que llevaba el avión, pues, claramente, teniendo en cuenta las obligaciones intrínsecas que cobijan el ente territorial, no daría paso a que se profiriera decisión condenatoria respecto del mismo, como quiera que nada puede hacer para que un tercero obedezca los lineamientos que emiten las autoridades aeronáuticas.

Es claro que, desde el punto de vista subjetivo la causa adecuada del daño resulta imputable a la persona que imprudentemente asumió una acción que tenía la virtualidad, según el curso normal de las cosas, de producir un daño. Dentro del caso concreto, la parte demandante, a pesar de conocer quién era el responsable por la prestación del servicio, no vinculó a la convocatoria al propietario de la aeronave, persona que, además, era quien

---

<sup>9</sup> JAVIER INDALECIO BARRAZA. Responsabilidad Extracontractual del Estado. Editorial La Ley. Buenos Aires 2003. Pág. 101.

<sup>10</sup> Según Patricio M. E. Sammartino, *“sólo se debe responder por aquellas consecuencias que resulten previsibles, es decir, aquellas que siguen el curso natural y ordinario de las cosas, es decir, las que corrientemente acaecen según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos”*. PATRICIO M. E. SAMMARTINO. La relación de causalidad en la responsabilidad del Estado. del libro: Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público. Jornadas organizadas por la Universidad Austral. Facultad de Derecho. Ediciones Rap S.A. Buenos Aires, Argentina, 2008. Pág. 441.



debía vigilar que se cumpliera con todas y cada una de las obligaciones que se derivan del servicio de transporte aéreo.

Ahora bien, si se analiza el caso desde la teoría objetiva de imputación del riesgo excepcional, con motivo de la actividad peligrosa que representa la conducción de vehículos, deberá, para efectos de realizarse la imputación respectiva, conocerse quién tiene la guarda material o jurídica del vehículo.

Dentro del caso concreto, tal como se ha venido señalando, la aeronave en la cual ocurrió el accidente no es de propiedad del Departamento del Cauca, incluso, no se sabe a quién le pertenece y, por ende, no se sabe quién ostentaba la guarda sobre la misma.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido lineal en el sentido de señalar que, para efectos de dar aplicación al régimen objetivo de responsabilidad, resulta necesario demostrar quien era la persona que ostentaba la guarda de la cosa o actividad peligrosa. Así, por ejemplo, en providencia de 24 de agosto de 1992, dentro del expediente No. 6754, estableció que en los eventos de responsabilidad estatal que se derivan del riesgo excepcional, actividades que, si bien son necesarias para el cumplimiento de los cometidos estatales, *“revisten una especial peligrosidad, lo que implica el deber, para quien tiene bajo su guarda dichas cosas o actividades peligrosas, de responder por los daños que con los mismos se ocasionen (...).*

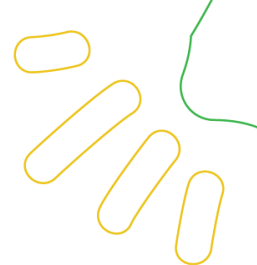
#### 4. HECHO DE UN TERCERO.

Dentro del caso que es objeto de análisis resulta aplicable plenamente, como causal eximente de responsabilidad, el hecho de un tercero. La doctrina ha entendido que por tercero debe tomarse *“cualquier persona diferente al deudor o causante del daño y que no tenga ninguna dependencia jurídica con el demandado. Conviene advertir que esa dependencia jurídica se refiere no solamente a la actividad peligrosa considerada en sí misma, sino también a cualquier otra persona, cosa o actividad que dependa jurídicamente del demandado”*

Ahora bien, para que la relación causal proveniente del tercero tenga la virtualidad de romper el vínculo señalado por la parte demandante, debe revestir de unos requisitos como resultan ser la exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad.

Dentro del caso que nos ocupa, todos esos elementos resultan claramente configurados, por lo que deberá darse aplicación a la causal eximente de responsabilidad. En efecto, el propietario de la aeronave así como el piloto y los responsables por hacer cumplir con las normas que rigen el transporte aéreo, no tiene ningún tipo de vínculo con la entidad que represento, incluso, dentro del presente no se sabe todavía quién era, por lo que se cumple con el elemento de la exterioridad. La imprevisibilidad e irresistibilidad se configuran igualmente si se tiene en cuenta que fue la imprudencia de éstos lo que llevó a que se ocasionara el accidente.

En tal sentido, dentro del caso sub examine el hecho del tercero aconteció sin que existiese culpa por parte del deudor, esto es, *“que éste no lo debe haber ocasionado ni empeorado*



en sus consecuencias”<sup>11</sup>, motivo por el cual deberá eximirse de responsabilidad al Departamento del Cauca.

El Tribunal Administrativo del Cauca ha defendido la posición que se acaba de indicar, al señalar:

*“Por lo que para esta Sala, a pesar que el municipio debía garantizar dichas condiciones, por tal omisión no se ve comprometida la responsabilidad del municipio. Toda vez que fue el proceder del señor José Duván Arrechea Ortega, persona ajena a la administración, como conductor del vehículo de placas ZIQ 712, el determinante y exclusiva en la ocurrencia del accidente de tránsito y por tanto en la producción del daño antijurídico, ya que su comportamiento fue imprudente y negligente al haber conducido en estado de embriaguez un vehículo cuya guarda correspondía al municipio de La Sierra y sin autorización de algún agente de la administración. El hecho fue exclusivo y determinante de un tercero”.*

En ese orden de ideas, se solicita en forma respetuosa que sea tenida en cuenta como causal eximente de responsabilidad dentro del caso concreto, el hecho del tercero, puesto que, tal como resulta comprobado, fue la conducta imprudente del conductor del vehículo lo que ocasionó el supuesto daño antijurídico por el cual ahora se demanda.

#### **5. LOS PERJUICIOS CUYA INDEMNIZACIÓN SE PERSIGUE NO SE ENCUENTRAN PROBADOS Y NO RESPETAN LOS ESTÁNDARES DADOS POR LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO.**

Dentro del caso *sub judice* el demandante solicitó que fueran indemnizados una serie de perjuicios de índole extrapatrimonial que no se encuentran probados y, por tanto, no podrá accederse a su resarcimiento. De la misma manera, se tiene que la solicitud de indemnización de perjuicios respecto de los daños extrapatrimoniales no se compadece con lo establecido por el Honorable Consejo de Estado en Sentencia de fecha 28 de agosto de 2014, con ponencia del Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

En efecto, de conformidad con lo señalado en el Documento Final aprobado mediante acta del 28 de agosto de 2014 y lo solicitado como indemnización de perjuicios inmateriales, no resulta posible indemnizar un mismo daño otorgándole una tipología distinta de perjuicios, tal como se pretende dentro del presente asunto por parte del convocante.

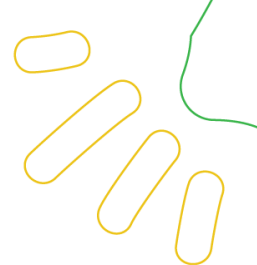
Finalmente, en cuanto hace con la solicitud de indemnización de los perjuicios que llama materiales, los cuales, según la forma en la cuales fueron solicitados hacen referencia a la esfera correspondiente al daño emergente, no se tiene prueba que -en efecto- se hayan causado, por lo que deberán negarse dentro del presente.

#### **PETICIÓN**

Que con fundamento en los anteriores argumentos debidamente sustentados en la normatividad vigente aplicable al caso y las pruebas que se adjuntan y sin perjuicio de las demás que se encuentren probadas según lo informado al despacho, proceda a declarar probadas las excepciones de **Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva y la Inexistencia**

---

<sup>11</sup> FERNÁNDEZ MADERO. Jaime. Derecho de daños. Nuevos aspectos doctrinarios y jurisprudenciales. Editorial La Ley. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 235.



**de la Obligación a cargo del Departamento del Cauca - Secretaría de Educación y Cultura** propuestas en la presente contestación, exonerando así a la entidad territorial de las condenas derivadas de las eventuales declaraciones a que en derecho haya lugar, en el presente asunto.

**PRUEBAS:**

**DOCUMENTALES:** Solicito tener como prueba las aportadas al proceso por la parte demandante y las que se aportan con esta contestación.

Las que su Despacho decrete de oficio por estimar pertinentes y conducentes.

**ANEXOS:**

Además de lo enunciado en el acápite de pruebas, me permito anexar los siguientes documentos:

1. Poder conferido por el Representante Legal de la Entidad Territorial, acta de posesión y constancia del ejercicio del cargo, que acreditan **ELIAS LARRAHONDO CARABALI**, como Gobernador del Departamento del Cauca. – tres (3) folios.

**NOTIFICACIONES:**

Las recibiré en la Carrera 6ª No. 3-82 de la ciudad de Popayán, teléfono 8244201, extensiones 148 – 149, Email: [ancizarjuridico2010@gmail.com](mailto:ancizarjuridico2010@gmail.com)  
[juridica.educacion@cauca.gov.co](mailto:juridica.educacion@cauca.gov.co)

Atentamente,



---

**ANCIZAR JIMENEZ ZEMANATE**

C.C. No. 4.695.912 de La Vega Cauca.

Tarjeta Profesional No. 204906 del C.S.J.



Popayán, mayo de 2022

Señores

**JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN**

Popayán - Cauca

**EXPEDIENTE:** 19013333008202200028-00

**DEMANDANTE:** MARTHA LUCIA OBANDO ZUÑIGA

**DEMANDADO:** DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO CAUCA.

**MEDIO DE CONTROL:** REPARACIÓN DIRECTA

**ELIAS LARRAHONDO CARABALI**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Popayán, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de **GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, por medio del presente escrito me permito manifestar a Usted, que confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente al abogado **ANCIZAR JIMENEZ ZEMANATE**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.695.912 de La Vega Cauca, y con T.P. 204906 del C. S. de la Judicatura, para que represente judicialmente y ejerza la defensa de los intereses jurídicos y económicos del Departamento del Cauca dentro del proceso la referencia.

El apoderado queda facultado para sustituir, desistir, renunciar, reasumir, presentar recursos en todas las instancias, conciliar conforme a las directrices impartidas por el Comité de Conciliación, aportar toda clase de documentos pertinentes para la defensa de la entidad o tachar de falsos los que a su juicio le sean, y en general para adelantar cuanto esté a su alcance tendiente al correcto cumplimiento del mandato conferido en los términos del Artículo 77 de la Ley 1564 de 2012.



**ELIAS LARRAHONDO CARABALI**

C.C. No. 10-365.206 expedida en Buenos Aires Cauca  
**Gobernador del Cauca**

Acepto,



**ANCIZAR JIMENEZ ZEMANATE**

Cédula No. 4.695.912 de La Vega Cauca  
T.P. No. 204906 del C.S. de la Judicatura  
Email: [ancizarjuridico2010@gmail.com](mailto:ancizarjuridico2010@gmail.com)

Revisó: Juan Fernando Ortega Olave – Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Virginia Balcázar Ortiz – Contratista Jurídica de Educación

Proyectó: Ancizar Jiménez – Abogado contratista oficina Jurídico SECD

Despacho  
Secretaría de Educación y Cultura  
Carrera 6 No 3-82, Edificio de la Gobernación  
Correo: [despacho.educacion@cauca.gov.co](mailto:despacho.educacion@cauca.gov.co)  
Teléfono: (057+2) 8244201 EXT.104



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO  
10.365.203

LARRAHONDO CARABALI

APELLIDOS  
ELIAS

NOMBRES

ESTADO CIVIL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1968

BUENOS AIRES  
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-ENE-1987 BUENOS AIRES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

2000-01-19



A-1108700-30163175-M-0010305200-20000119 0136400019A 02 278783271



**ACTA DE POSESIÓN DEL DR. ELÍAS LARRAHONDO CARABALÍ COMO  
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
PERÍODO 2020-2023**

En la ciudad de Popayán, Cauca, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019), teniendo en cuenta que de conformidad con el Decreto 1222 de 1986 (modificado por la ley 617 de 2000), "Los gobernadores de los departamentos se posesionarán ante las Asambleas Departamentales, y en su defecto, ante el respectivo Tribunal Superior, residente en el lugar. En casos graves y excepcionales, pueden posesionarse ante cualquier empleado que ejerza jurisdicción o ante dos testigos". Además, la Asamblea del Departamento del Cauca no se encuentra en sesiones ordinarias, y El Tribunal Superior de Popayán se encuentra en vacancia judicial,

Con tal fundamento legal y con el fin de dar posesión a quien fuera elegido Gobernador del Departamento del Cauca, por votación popular realizada el 27 de octubre de 2019, por la situación excepcional habilitante y ante los testigos, Magistrados del Tribunal Superior de Popayán, domiciliados en la ciudad, MARÍA CONSUELO CÓRDOBA MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No 34.535.694 expedida en Popayán y ARY BERNARDO ORTEGA PLAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No 10.690.448 expedida en Patía, compareció el Dr. Elías Larrahondo Carabalí, quien se identificó con Cédula de Ciudadanía No 10.365.206 de-Buenos Aires Cauca e igualmente presentó la credencial de fecha 4 de noviembre de 2019(E-27) de la Comisión Escrutadora General- Registraduría Nacional del Estado Civil, que lo acredita como Gobernador del Departamento del Cauca, para el período constitucional 2020-2023, por el Partido Coalición Porque Sí es Posible.

Además de los documentos mencionados, el posesionado presentó Hoja de Vida en Formato Único de la Función Pública, Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, Libreta Militar No 10385286 de las Fuerzas Militares como Reservista de Segunda Clase, Certificado de Antecedentes Disciplinarios de fecha 23 de diciembre de 2019, expedido por la Procuraduría General de la Nación (No registra sanciones ni inhabilidades especiales aplicadas al cargo); Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos judiciales de fecha 24 de diciembre de 2019, expedido por la Policía Nacional de Colombia (No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales); Certificado de Antecedentes Fiscales de fecha 22 de diciembre de 2019, expedido por la Contraloría General de la República (No se encuentra reportado como responsable fiscal); Certificado de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- de su participación en el Seminario de Inducción de Alcaldes y Gobernadores, realizado en la ciudad de Bogotá los días 25,26 y 27 de noviembre de 2019 (Ley 489 de 1998); Declaraciones bajo juramento del 23 de diciembre de 2019 ante el Notario Treinta y Uno (31) de la ciudad de Bogotá, Miguel Antonio Zamora Ávila, en donde manifiesta que "No estoy incurso



en causa alguna de inhabilidad general o especial de incompatibilidad o prohibición de las establecidas para el cargo de Gobernador del Departamento del Cauca" y "No tengo demandas pendientes de carácter alimentario en mi contra, además cumplo a cabalidad con todos mis deberes familiares y laborales".

A continuación los testigos, señores Magistrados MARIA CONSUELO CÓRDOBA MUÑOZ Y ARY BERNARDO ORTEGA PLAZA, proceden a tomar el juramento de ley, así: *"Doctor ELIAS LARRAHJONDO CARABALI jura ante Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas, los decretos y las funciones propias del cargo de Gobernador del Departamento del Cauca?"*.

El posesionado respondió: *"Sí, lo juro"*

Los magistrados afirmaron: *"Si así lo hicieréis, Dios y la Patria se lo premien y si no, él y ella se lo demanden"*.

Acto seguido le fue impuesta la banda que acredita al Dr., Elías Larrahondo Carabalí como Gobernador del Departamento del Cauca para el período constitucional entre el primero de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.

No sienta otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada, previa su lectura y aprobación, por quienes en ella intervinieron. La presente surte efectos legales y fiscales a partir del primero de enero de 2020.

El posesionado,



**ELIAS LARRAHONDO CARABALI**

Los testigos,



**MARIA CONSUELO CÓRDOBA MUÑOZ**



**ARY BERNARDO ORTEGA PLAZA**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO  
10.365.203

LARRAHONDO CARABALI

APELLIDOS  
ELIAS

NOMBRES

ESTADO CIVIL

FECHA DE EMISION

ESTADO DE LA CIUDADANIA



FECHA DE NACIMIENTO 05-FEB-1968

BUENOS AIRES  
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-ENE-1967 BUENOS AIRES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1108700-30163175-M-0010305200-20060119 0136408019A 02 278783271





**ACTA DE POSESIÓN DEL DR. ELÍAS LARRAHONDO CARABALÍ COMO  
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
PERÍODO 2020-2023**

En la ciudad de Popayán, Cauca, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019), teniendo en cuenta que de conformidad con el Decreto 1222 de 1986 (modificado por la ley 617 de 2000), "Los gobernadores de los departamentos se posesionarán ante las Asambleas Departamentales, y en su defecto, ante el respectivo Tribunal Superior, residente en el lugar. En casos graves y excepcionales, pueden posesionarse ante cualquier empleado que ejerza jurisdicción o ante dos testigos". Además, la Asamblea del Departamento del Cauca no se encuentra en sesiones ordinarias, y El Tribunal Superior de Popayán se encuentra en vacancia judicial,

Con tal fundamento legal y con el fin de dar posesión a quien fuera elegido Gobernador del Departamento del Cauca, por votación popular realizada el 27 de octubre de 2019, por la situación excepcional habilitante y ante los testigos, Magistrados del Tribunal Superior de Popayán, domiciliados en la ciudad, MARÍA CONSUELO CÓRDOBA MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No 34.535.694 expedida en Popayán y ARY BERNARDO ORTEGA PLAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No 10.690.448 expedida en Patía, compareció el Dr. Elías Larrahondo Carabalí, quien se identificó con Cédula de Ciudadanía No 10.365.206 de-Buenos Aires Cauca e igualmente presentó la credencial de fecha 4 de noviembre de 2019(E-27) de la Comisión Escrutadora General- Registraduría Nacional del Estado Civil, que lo acredita como Gobernador del Departamento del Cauca, para el período constitucional 2020-2023, por el Partido Coalición Porque Sí es Posible.

Además de los documentos mencionados, el posesionado presentó Hoja de Vida en Formato Único de la Función Pública, Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, Libreta Militar No 10385286 de las Fuerzas Militares como Reservista de Segunda Clase, Certificado de Antecedentes Disciplinarios de fecha 23 de diciembre de 2019, expedido por la Procuraduría General de la Nación (No registra sanciones ni inhabilidades especiales aplicadas al cargo); Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos judiciales de fecha 24 de diciembre de 2019, expedido por la Policía Nacional de Colombia (No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales); Certificado de Antecedentes Fiscales de fecha 22 de diciembre de 2019, expedido por la Contraloría General de la República (No se encuentra reportado como responsable fiscal); Certificado de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- de su participación en el Seminario de Inducción de Alcaldes y Gobernadores, realizado en la ciudad de Bogotá los días 25,26 y 27 de noviembre de 2019 (Ley 489 de 1998); Declaraciones bajo juramento del 23 de diciembre de 2019 ante el Notario Treinta y Uno (31) de la ciudad de Bogotá, Miguel Antonio Zamora Ávila, en donde manifiesta que "No estoy incurso



en causa alguna de inhabilidad general o especial de incompatibilidad o prohibición de las establecidas para el cargo de Gobernador del Departamento del Cauca" y "No tengo demandas pendientes de carácter alimentario en mi contra, además cumplo a cabalidad con todos mis deberes familiares y laborales".

A continuación los testigos, señores Magistrados MARIA CONSUELO CÓRDOBA MUÑOZ Y ARY BERNARDO ORTEGA PLAZA, proceden a tomar el juramento de ley, así: *"Doctor ELIAS LARRAHJONDO CARABALI jura ante Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas, los decretos y las funciones propias del cargo de Gobernador del Departamento del Cauca?"*.

El posesionado respondió: *"Sí, lo juro"*

Los magistrados afirmaron: *"Si así lo hicieréis, Dios y la Patria se lo premien y si no, él y ella se lo demanden"*.

Acto seguido le fue impuesta la banda que acredita al Dr., Elías Larrahondo Carabalí como Gobernador del Departamento del Cauca para el período constitucional entre el primero de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.

No sienta otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada, previa su lectura y aprobación, por quienes en ella intervinieron. La presente surte efectos legales y fiscales a partir del primero de enero de 2020.

El posesionado,



**ELIAS LARRAHONDO CARABALI**

Los testigos,



**MARIA CONSUELO CÓRDOBA MUÑOZ**



**ARY BERNARDO ORTEGA PLAZA**